

restantes Administraciones Públicas y los Sindicatos más representativos a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y comprenderá, de entre las materias relacionadas en el artículo anterior, las que ambas partes estimen oportuno.

Artículo 34

1. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, en su caso, las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio del derecho de los ciudadanos ante los funcionarios públicos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativos.

2. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente Ley.

Artículo 35

Los representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales y de las Organizaciones Sindicales o Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente Ley podrán llegar a Acuerdos y Pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.

Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y vincularán directamente a las partes.

Los Acuerdos versarán sobre materias competencia del Consejo de Ministros, Consejos de Gobierno de Comunidades Autónomas u órganos correspondientes de las Entidades Locales. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal de estos órganos en su ámbito respectivo.

Los Pactos y Acuerdos deberán establecer las partes intervinientes y el plazo de vigencia, así como su ámbito personal, funcional y territorial. Por acuerdo de las partes, podrán establecerse comisiones de seguimiento de los Pactos y Acuerdos.

Artículo 36

Los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados se remitirán a la oficina pública a que hace referencia la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y serán de inmediato publicados en el "Boletín Oficial del Estado" o diarios oficiales correspondientes.

Artículo 37

1. El Gobierno, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o el órgano correspondiente de las Entidades Locales podrán determinar, respectivamente, las instrucciones a que deberán atenerse sus representantes cuando proceda la negociación con la representación sindical establecida en este Capítulo.

2. Corresponderá al Gobierno, en los términos del artículo 3.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y a los órganos de gobierno de las demás Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos, establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos en los casos en que no se produzca acuerdo en su negociación o no se alcance la aprobación expresa y formal a que alude el artículo 35.

Artículo 38

1. Las Administraciones Públicas y los Sindicatos a que se refieren los artículos 30 y 31.2 podrán nombrar de mutuo acuerdo un mediador o mediadores cuando no resulte posible llegar a acuerdo en la negociación o surjan conflictos en el cumplimiento de los Acuerdos o Pactos.

2. La mediación se efectuará conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.

3. Las propuestas del mediador y la oposición de las partes, en su caso, deberán hacerse públicas de inmediato.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—La composición y funcionamiento de los órganos electorales contemplados en la Ley 9/1987, de 12 de junio, con excepción de las Mesas electorales, se establecerá reglamentariamente, previa negociación con los Sindicatos con derecho a estar presentes en la Mesa General a tenor del artículo 31.2. El funcionamiento de dichos órganos electorales se regirá, para todo aquello no regulado expresamente, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de la Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo.

Dicha regulación se acomodará, sin perjuicio de las especificidades derivadas de la relación estatutaria, a lo establecido para la composición de los órganos electorales en el caso de las elecciones celebradas al amparo de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores.

Segunda.—Promovidas las elecciones sindicales ante el Consejo Superior de la Función Pública, en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley 9/1987, su Presidente dará traslado de la iniciativa a la Junta Electoral General, que habrá de constituirse, y a la que pasan a corresponder el resto de las competencias electorales que la citada Ley atribuya al Consejo.

Tercera.—Las referencias a la oficina pública en los artículos 20.4 y 27.5 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, se entenderán realizadas a la oficina pública a que se refiere la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Cuarta.—El artículo 5 de la Ley 9/1987 quedará redactado en la forma siguiente:

«La representación de los funcionarios en aquellas Entidades Locales que cuenten al menos con diez funcionarios y no alcancen el número de 50, corresponderá a los Delegados de Personal. Igualmente, podrá haber un Delegado de Personal en aquellos centros que cuenten entre seis y diez funcionarios si así lo decidieran éstos por mayoría.

Los funcionarios elegirán Delegados de Personal de acuerdo con la siguiente proporción:

Hasta 30 funcionarios, uno.

De 31 a 49 funcionarios, tres, que ejercerán su representación mancomunadamente.»

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos siguientes de la Ley 9/1987: Artículos 23.2; 24, párrafos segundo y tercero, y 25.2, en lo que se refiere a la composición de los órganos electorales en ellos citados; el artículo 13, párrafos segundo y tercero, y el artículo 25.1 en lo que respecta a la ubicación de la Junta Electoral General en el seno del Consejo Superior de la Función Pública.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 19 de julio de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

17364 *CONFLICTOS positivos de competencia acumulados números 400 y 449/1986, planteados, respectivamente, por la Junta de Galicia y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con el Real Decreto 2342/1985, de 4 de diciembre.*

El Tribunal Constitucional, por auto de 11 de julio actual, ha acordado tener por desistidos de los conflictos acumulados números 400 y 449/1986, a sus promoventes, Junta de Galicia y Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, respectivamente, planteados el primero contra la totalidad del Real Decreto 2342/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración Local, y el segundo contra los artículos 3, y, por conexión necesaria, el apartado 5, del artículo 10 y la disposición transitoria segunda; 6.2 y 7, excepto el apartado 2.3, d); 8.2 y 3, disposición adicional, y disposición transitoria primera del mismo Real Decreto.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 11 de julio de 1990.—El Presidente del Tribunal Constitucional.

TOMAS Y VALIENTE

17365 *CUESTIONES de inconstitucionalidad números 1.030, 2.594 y 2.595/1989, acumuladas.*

El Tribunal Constitucional, por auto de 11 de julio actual, ha acordado declarar extinguida la cuestión de inconstitucionalidad número 2.594/1989, planteada por la Sección Primera de la Audiencia

Provincial de Valladolid, respecto del artículo 47.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Decreto número 923/1973, de 17 de marzo, quedando abierto el proceso en cuanto a las otras dos cuestiones acumuladas con la anterior, números 2.595/1989 y 1.030/1989, que fueron planteadas, respectivamente, por la misma Sección antes mencionada y por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Oviedo, respecto de igual precepto.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de julio de 1990.—El Secretario de Justicia.—Firmado y rubricado.

17366 *CUESTION de inconstitucionalidad número 1.477/1990, planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ordes.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de julio actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 1.477/1990, planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ordes, por supuesta inconstitucionalidad de la expresión «desde la fecha del siniestro» contenida en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de modificación del Código Penal, por poder vulnerar el artículo 24.1 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de julio de 1990.—El Secretario de Justicia.—Firmado y rubricado.

17367 *CUESTION de inconstitucionalidad número 1.625/1990.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de julio actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 1.625/1990, planteada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, respecto de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, por poder vulnerar los artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de julio de 1990.—El Secretario de Justicia.—Firmado y rubricado.

17368 *CUESTION de inconstitucionalidad número 1.629/1990.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de julio actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 1.629/1990, planteada por el Juzgado de Menores número 4 de Madrid, respecto del artículo 15 de la Ley de Tribunales de Menores, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, por poder ser contrario a los artículos 9.3, 14 y 24 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de julio de 1990.—El Secretario de Justicia.—Firmado y rubricado.

17369 *CUESTION de inconstitucionalidad número 1.689/1990.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de julio actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 1.689/1990, que ha sido planteada por el Juzgado de Primera Instancia de Ordes, respecto de la expresión «desde la fecha del siniestro» contenida en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de modificación del Código Penal, por poder ser contraria al artículo 24.1 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de julio de 1990.—El Secretario de Justicia.—Firmado y rubricado.

17370 *RECURSO de inconstitucionalidad número 1.710/1990, planteado por el Presidente del Gobierno contra la Ley de las Cortes de Castilla y León 3/1990, de 16 de marzo.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de julio actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1.710/1990, planteado por el Presidente del Gobierno contra la Ley de las Cortes de Castilla y León 3/1990, de 6 de marzo, de Seguridad Industrial de Castilla y León. Y se hace saber que en el

mencionado recurso se ha invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, que produce desde el día 4 de julio del corriente, fecha de la formalización, la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley de las Cortes de Castilla y León 3/1990, de 16 de marzo.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de julio de 1990.—El Presidente del Tribunal Constitucional,

TOMAS Y VALIENTE

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

17371 *CORRECCION de errores de la Resolución de 19 de junio de 1990, de la Dirección General de Transacciones Exteriores, por la que se dan normas de procedimiento en materia de garantías exteriores.*

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 158, de 3 de julio de 1990, páginas 18900 y 18901, se relacionan a continuación las oportunas rectificaciones:

Párrafo segundo, donde dice: «... correspondiente.», debe decir: «... correspondientes.».

Disposición derogatoria, donde dice: «... 16 de febrero de 1986 ...», debe decir: «... 16 de febrero de 1989 ...».

17372 *CORRECCION de erratas de la Resolución de 4 de julio de 1990, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas para el año 1990 de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.*

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 161, fecha de 6 de julio de 1990, se transcriben las siguientes rectificaciones:

Página 19342, en el punto 2.3, donde dice: «... y la realmente recibida.», debe decir: «... y la realmente percibida.»

Página 19343, en el punto 4.13, segundo párrafo, donde dice: «... se harán efectivas por la Dependencia que diligencie ...», debe decir: «... se harán efectivas por la Dependencia que diligencie ...».

Página 19344, en el anexo III, cuantía mensual en 31 de diciembre de 1989, donde dice: «52.842», debe decir: «51.482».

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

17373 *ORDEN de 19 de julio de 1990 por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 1990-1991.*

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, establece que las tasas académicas por estudios conducentes a títulos oficiales serán fijadas por la Comunidad Autónoma correspondiente, o por la Administración Central en el caso de Universidades ubicadas en Comunidades Autónomas que hubieran accedido a la Autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, dentro de los límites que establezca el Consejo de Universidades. En tanto que las correspondientes a los restantes estudios las fijará el Consejo Social de la Universidad.

Posteriormente, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos ha abordado la distinción entre estas dos figuras, delimitando el concepto y régimen jurídico específico de la figura de precio público y preceptuando que la fijación y modificación de su cuantía se realizará por Orden; por otra parte, esta Ley asume los supuestos de hecho y dualidad de regímenes contenidos en el artículo 54.3, b), de la Ley de Reforma Universitaria al tratar de las tasas y demás derechos, si bien